



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DIECIOCHO (18) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá D. C., nueve de septiembre de dos mil veintiuno

Procede el despacho a resolver las excepciones previas propuesta por la apoderada judicial del demandado, denominadas “COMPROMISO O CLÁUSULA COMPROMISORIA y NO HABERSE PRESENTADO PRUEBA DE LA CALIDAD DE DEMANDANTE” las cuales se fundamentan de la siguiente manera:

1. Compromiso o cláusula compromisoria.

Fundamentada en la existencia de causal de excepción previa contemplada en el numeral 2° del art. 100 del C.G. del P., teniendo en cuenta que el aquí demandado adquirió la obligación que se ejecuta con la entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA, para que la misma fuese pagada por la modalidad de libranza, por lo que de ese modo las partes pactaron y celebraron un compromiso.

Se considera.

Cláusula Compromisoria – Definición: La cláusula compromisoria es el pacto contenido en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. Entretanto, el compromiso es un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un Tribunal de Arbitramento. A pesar de que la voluntad en el pacto arbitral consiste simplemente en la decisión clara e inequívoca de someter una determinada controversia a la decisión de un grupo de árbitros, los artículos 116 y 117 del Decreto 1818 de 1998 exigen su carácter documental como solemnidad sustancial para que se reputa legalmente perfecto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el problema jurídico a resolver dentro del asunto de estudio, se circunscribe a determinar, si las pactadas en el pagaré báculo de la ejecución, tiene la virtualidad suficiente para cobijar con sus efectos el cobro ejecutivo de las obligaciones que de ella se desprenden, o si contrario a ello, es la justicia arbitral quien debe asumir el conocimiento del litigio.

Al respecto, el artículo 116 de la Constitución Política, establece la posibilidad para que las partes, partiendo del principio de autonomía de la voluntad, pueden someter sus eventuales controversias a los particulares investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, bajo el seguimiento de la reglamentación especial, como lo es la ley 1536 de 2012.

*“(…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, **en los términos que determine la ley.** (…)”*
(subrayado fuera del texto original).

En esta dirección, debe resaltarse, por un lado, que la competencia atribuida a los Tribunales de Arbitramento se limita a la estipulación contractual a que hayan llegado las partes, es decir, no puede ir más allá de los asuntos preestablecidos por ellos, entendiéndose que las controversias dadas respecto de lo allí no acordado resulta un asunto propio de la administración de justicia en cabeza del Estado, toda vez que el arbitraje, como se expresó es un régimen excepcional, eventual y netamente selectivo, lo que implica que la interpretación a las cláusulas compromisorias, no puede aplicarse in extenso en contraposición con la jurisdicción que de acuerdo a la estructura general del Estado se le adjudicó a los jueces de la República.

Así mismo, el artículo 116 superior estudiado, en igual sentido, restringió los asuntos de eventual ventilación por la vía arbitral, en los términos que la ley disponga, ingrediente normativo que implica trasladarse a lo dispuesto en la ley 1563 de 2012 Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, en donde el legislador no previó la posibilidad de adelantar trámites ejecutivos, razón por la cual, el poder jurisdiccional de adelantar los procesos ejecutivos, está reservado para los jueces de la república, debido a la fuerza coercitiva de esos juicios, a las órdenes y a las medidas cautelares, que en esos litigios deben adoptarse.

En respaldo de dicha tesis, deviene necesario memorar que en decisiones de similar laya, la Corte Suprema de Justicia decantó que:

*“así se admita la posibilidad de convocar tribunales de arbitramento para tramitar procesos ejecutivos, surgen dos obstáculos que deben ser superados para que aquellos puedan actuar válidamente en tal clase de procesos: **1. De un lado, es necesario que el legislador autorice y establezca el procedimiento a seguir por parte de los árbitros, cuando se trata de cobros ejecutivos**, puesto que el procedimiento que actualmente existe, corresponde a un proceso de conocimiento, declarativo y de condena, que obviamente no resulta adecuado para aquella finalidad. 2. De otro lado, **es necesario que las partes expresamente hayan acordado en el pacto arbitral la posibilidad de someter al conocimiento de árbitros el cobro coactivo de obligaciones claras, expresas y exigibles, contenidas en títulos ejecutivos – en este caso, derivados de contratos estatales**-, es decir, que de manera expresa y concreta incluyan en la cláusula compromisoria o en el compromiso, el acuerdo de tramitar los procesos ejecutivos que se puedan suscitar entre ellas, ante Tribunales de arbitramento y no ante la jurisdicción ordinaria...”; (ii) No reparó en que **el artículo 116 superior le otorga a los árbitros una facultad “transitoria” de administrar justicia**, y por ello, a partir de la simple constatación de la cláusula compromisoria, concluyó en que el asunto era del resorte del tribunal de arbitramento. Es decir, no sopesó, como era su deber, **si del proceso ejecutivo puede reputarse una temporalidad específica**, valga anotar, si se sabe cuándo es su comienzo y en qué momento su final, y adicionalmente, si la misma es posible deducirla del convenio de las partes o de lo previsto en legislación. Y (iii) Tampoco tuvo en cuenta, como lo ha pregonado la Sala de Casación Civil, que **“si los árbitros no están legalmente facultados para ejecutar los laudos que profieren, menos aún puede llegar a considerarse que pueden hacerlo respecto de obligaciones derivadas de instrumentos creados por particulares o de providencias judiciales...”** (Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 2013-00217-00), (Negrilla fuera de texto).*

En la misma dirección apuntalo el Alto Tribunal en materia Civil que:

*"(...) Entonces, si, conforme a la Constitución y la ley los árbitros no pueden ejecutar coactiva o forzosamente sus propias decisiones recogidas en laudos, mucho menos pueden hacerlo respecto de otras decisiones judiciales, ni de decisiones o títulos creados por los particulares que requieran de poder o potestad coactiva. Pues esto es de tal entidad que su representación en la libertad (v. gr. mandamiento forzoso de pago) y en el patrimonio (v. gr. la ejecución, remate, etc.) del ejecutado, requiere, a juicio de nuestro ordenamiento, de la intervención de los órganos jurisdiccionales permanentes del Estado. De allí que si la ley no establece distinción dentro de la reserva estatal para este tipo de conocimiento, se concluya que **de la competencia y jurisdicción arbitral, quedan excluidos todos los procesos ejecutivos** (...)"*.(C.S.J. Cas. Civil. 23 sep. 1994, exp. 1566.) (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, del estudio de la cláusula invocada como medio exceptivo debe señalarse que la misma no tiene vocación de prosperidad, comoquiera, por un lado, de la revisión del pagaré no se evidencia que las partes hayan acordado de forma clara y sin lugar a interpretaciones extensivas, revestir a un Tribunal de Arbitramento, con la facultad para poder dar trámite a un proceso ejecutivo, y de otro, la competencia para el conocimiento de obligaciones ejecutivas recae exclusivamente sobre los jueces de la república.

En consecuencia, ante el fracaso de la excepción planteada por el extremo pasivo, el Despacho no repondrá el auto recurrido.

2. No haberse presentado prueba de la calidad de demandante.

Fundamentada en la existencia de causal de excepción previa contemplada en el numeral 6° del art. 100 del C.G. del P., ya que como bien lo manifiesta el extremo actor en su escrito de demanda, el aquí demandado se constituyó deudor del BANCO DAVIVIENDA mediante pagaré, y éste último endoso en propiedad el referido título a favor de la sociedad demandante, sin que a la fecha le haya sido notificada dicho trámite al deudor, lo que conlleva a que el demandante no aportó la prueba de su calidad.

Se considera.

En primer lugar es de señalar que, en la medida en que los títulos valores son documentos que incorporan un derecho, la calidad documental es esencial para el nacimiento, conservación y disfrute del derecho incorporado, y sin ella no es posible hacerlo efectivo, transmitirlo a un tercero, o utilizarlo como garantía.

Así las cosas, y de acuerdo con la doctrina, el documento no tiene una función probatoria sino de disposición, por cuanto integra el instrumento que atribuye a su tenedor legítimo la posibilidad de disponer del contenido del mismo¹.

La incorporación se refiere a la materialización de un derecho intangible en el documento, por lo tanto este elemento es el que le da lugar a la unidad entre el derecho y el documento, es decir, es la conexión entre el título y el derecho que representa, en virtud de la cual se determina el contenido del mismo.

¹ NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano Títulos – Valores. Bogotá. Editorial Legis., 2ª edición, página 53.

La literalidad del título constituye la determinación en el alcance y contenido del derecho consignado en el título, lo anterior significa que el derecho incorporado y cualquier otro elemento accesorio a él mismo son los que aparecen en el documento. Tal elemento está configurado en el art. 626 del C.C., en los siguientes términos:

“Art. 626.- El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia”.

A su vez, el art. 627 ib ídem señala expresamente que *“Todo suscriptor de un título-valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los demás”*, lo que evidencia que la autonomía consiste en la autonomía de las partes en su posición jurídica y en relación con los derechos transferidos en el proceso de circulación del título valor, lo cual implica que cada adquirente del título valor adquiere un derecho independiente al del tenedor anterior, y por lo tanto el derecho de cada uno de los suscriptores no se verá afectado por las excepciones personales que hubieran podido oponerse a los anteriores.

De conformidad con el art. 647 del C.C., el cual reza: *“Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación”*, lo que hace referencia a la facultad que tiene el tenedor del título valor, siempre y cuando lo haya adquirido conforme a su ley de circulación, para ejercer o disponer del derecho incorporado en el documento.

En este orden de ideas, se encuentra plenamente demostrado que la sociedad demandante SISTEMCOBRO S.A.S., es la legitimada por activa para ejercer los derechos incorporados en el pagaré base del recaudo, pues conforme al anexo obrante a folio 3 del cuaderno principal (endoso), ostenta la calidad de endosataria, adicionalmente por ser la tenedora del referido documento, sin que la norma exija la necesidad de notificar el deudor de tal determinación, lo que desvirtúa el argumento de la pasiva, referida a que la parte demandante no ostenta tal calidad.

Como consecuencia de lo anterior, es decir, al no prosperar los medios de defensa en los cuales sustenta el demandado los medios exceptivos, el Despacho no revocará entonces el auto recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá D.C.,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones previas propuestas por la apoderada judicial del demandado, dado lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO: Se condena en costas al demandado WOLFER ROA TROCHEZ. Tásense, teniendo en cuenta como agencias en derecho la suma de **\$1.400.000.00.**


NOTIFIQUESE,

FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ PARGA

JUEZ

(2)

NOTIFICACIÓN POR ESTADO:
La providencia anterior es notificada por anotación en
ESTADO No. 067 Hoy 10 de septiembre de 2021.
La Secretaria



LUISA FERNANDA LOZANO LINARES

2019-01427

KMM

Firmado Por:

Felix Alberto Rodriguez Parga

Juez

Civil 018

Juzgado Municipal

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1c05b12d3325725f807ba30b52080103ace5c1bff49443f32abb673b01cdf28c**

Documento generado en 09/09/2021 01:27:25 PM